

Nuestros lectores opinan

Balance de 2011 y desafíos para 2012

Luis Armando González

El año 2011 ha terminado. Fue un año muy movido en distintos ámbitos, sobre todo en el ambiental, educativo, político y económico. De las dinámicas generadas en cada uno de los ámbitos señalados, la de mayor envergadura ha sido la vivida por el sistema educativo. El proceso de cambio iniciado a mediados de 2009 poco a poco va transformando no sólo las estructuras institucionales de la educación salvadoreña, sino también el ejercicio docente mismo a partir de una apuesta por la dignificación magisterial.

La formación docente de primer nivel es parte constitutiva de esta dignificación magisterial; también lo es el fomento de la ética y de la autoestima, sin las cuales la calidad educativa tan anhelada se quedará en tecnicismos y científicismos ajenos a la realidad nacional. El salto en la calidad educativa no es inmediato ni mecánico; debe incubarse lentamente hasta arraigar en las prácticas y convicciones de los actores educativos del país.

Sin mucho ruido y sin la espectacularidad mediática que caracteriza a otras dinámicas, estamos viviendo un cambio educativo de envergadura cuya concreción última será la vigencia de la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno que está dejando de ser un ideal para convertirse en una realidad ahí donde maestros, alumnos y comunidad la han hecho suya como ideal y como proyecto viable de cambio educativo.

Políticamente, el país, como en otros años, estuvo marcado por debates políticos interminables. Uno de los ejes de ese debate fue el suscitado por la cancelación, aún no finiquitada del todo, de los partidos PCN y PDC. Asuntos de interpretación de la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que mandaba al Tribunal Supremo Electoral proceder a la cancelación de esos partidos, impidieron realizar de manera expedita una decisión que era de rigor llevar a afecto lo más pronto posible.

Al calor de ese debate se abrió paso, casi insensiblemente y al margen de la legalidad, la campaña electoral que culminará con las elecciones municipales y

legislativas de este año. Aquí lo novedoso fueron las readecuaciones, también inconclusas, de la institucionalidad electoral en vistas a asegurar lo mandado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en orden a abrir espacio a las candidaturas independientes e impulsar las listas abiertas y desbloqueadas de los candidatos a diputados.

Se ha caminado bastante en esa dirección -de hecho, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, declaró, casi al cierre de 2011, que todo estaba listo en materia de logística electoral—, pero la prueba de fuego de esos cambios será en las elecciones del próximo año.

En el ámbito social, la violencia siguió siendo el gran desafío. La complejidad del problema es tal que los distintos ensayos realizados para contenerla, sin ser malos, no han dejado satisfechos a amplios sectores sociales. La llegada de un nuevo ministro de seguridad pública no dejó de generar un acalorado debate, sobre todo por ser el nuevo funcionario un exmilitar.

Los temores sobre una posible militarización de la sociedad se hicieron públicos en distintos ambientes. También, por el lado contrario, no faltaron quienes vieron con simpatía el nombramiento del nuevo ministro. Se trata de un puesto en el que se tiene que probar, de manera perentoria, lo que se puede hacer en materia de seguridad. Es decir, son los resultados los que deben contar a la hora de evaluar la idoneidad del nuevo funcionario. Claro está que no se trata de cualesquiera resultados, sino de unos que, a la vez que lleven a un mejor clima de seguridad ciudadana, se inscriban en el marco de los principios de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Ni más ni menos.

Ambientalmente, El Salvador vivió una situación climática devastadora. Las persistentes lluvias de octubre de 2011 pusieron de manifiesto, una vez más, la vulnerabilidad de amplios sectores de la población. Lo positivo de la situación fue la respuesta oportuna de las autoridades que, con un sistema de emergencia ágil, disminuyeron el impacto humano de la tragedia. Hubo instancias ministeriales cuya labor fue ejemplar, en cuanto a la atención a las víctimas y a la reparación de los daños. El Ministerio de Obras Públicas, ANDA y Protección Civil, entre otras, pusieron su mejor empeño en la crisis, haciendo evidente que el Estado puede y debe hacerse cargo del bienestar social entendido de manera amplia.

Por último, en el ámbito económico la situación tuvo un giro inesperado y prometedor con la aprobación, casi al cierre del año, de una reforma fiscal que contiene aspectos de progresividad que en reformas anteriores se habían obviado con displicencia. Los sectores empresariales más poderosos -aglutinados en la ANEP y FUSADES— no recibieron la noticia de manera grata; al contrario, desde el momento mismo en el que la reforma se discutía en la Asamblea Legislativa presionaron para que se revirtiera.

Una vez aprobada volvieron sobre los argumentos de siempre: que la inversión privada iba a disminuir y que los consumidores iban a terminar pagando el aumento de impuestos a las empresas y personas con mayores ingresos. Un coro de analistas de distinta procedencia hizo eco del malestar empresarial que en muchas ocasiones se tradujo en posturas de amenaza y chantaje.

Y lo que ha quedado claro es que en algunos sectores empresariales la visión de país brilla por su ausencia, pues lo que en realidad les importa es amasar fortunas y despilfarrarlas sin tomar en cuenta la miseria y abandono que golpean a una buena parte de la sociedad salvadoreña. Su argumento de que el Estado debe contar con los recursos mínimos obedece a un ideal neoliberal de dudosa seriedad. Sin un Estado fuerte en lo financiero, lo administrativo y lo institucional las sociedades actuales no van a ninguna parte.

En definitiva, 2011 fue un año marcado por dinamismos que indican que hay realidades que pueden cambiarse en El Salvador, aunque no a un ritmo veloz como algunos sectores críticos quisieran. Es decir, lo deseable -un cambio estructural- ha tenido que ceder ante lo posible -reformas en aquellos ámbitos que es urgente atender, pues en ellos la precariedad y la exclusión son hirientes-. Con todo, lo deseable debe seguir presente como horizonte de lo posible, y lo posible no derivar en lo meramente pragmático. Ese es el gran desafío de la transición salvadoreña en la actualidad. Pero hay otros desafíos de cara al 2012.

En efecto, el inicio de un nuevo año es propicio para plantearse desafíos que encaucen las mejores energías y talentos de los sectores críticos de la sociedad. Los problemas del país son complejos y variados, de tal suerte que discernir su naturaleza y plantear alternativas para su solución se convierte, de entrada, en un ingente desafío. Pero no todos los problemas pesan igual en la configuración de la realidad histórica; de hecho, no sólo los hay unos de mayor envergadura que otros, sino los que son más o menos fundamentales.

Mezclar las cosas, poner todo en un mismo plano, no distinguir niveles de complejidad y de gravedad en los problemas, conduce a la confusión, al ofuscamiento y no pocas veces al amarillismo mediático. De este a la manipulación solo hay un paso, que en épocas electorales se da de forma casi insensible.

De aquí que discernir acerca de la naturaleza de cada problema, establecer las debidas jerarquizaciones entre la gama de problemas que nos afectan, y ponderar debidamente su grado de complejidad y gravedad sea un desafío de primera importancia.

Definitivamente, no se pueden atacar todos los problemas a la vez, no solo porque no son de la misma magnitud, sino porque no hay recursos suficientes

para ello. Se tienen que atacar aquellos que, en orden de profundidad, marcan la realidad nacional. Y, en ese sentido, no se deben malgastar las energías colectivas y los escasos recursos del país en atender exageradamente asuntos secundarios.

A propósito de esto último, no dejó de llamar la atención la cobertura mediática que se dio al tema de la pólvora y a su impacto durante las festividades de navidad y fin de año. Por supuesto que es grave que haya niños quemados o amputados por el mal uso de artefactos elaborados con pólvora. Ahora bien -y al margen de cualquier discusión sobre las tradiciones— en la escala de prácticas y hábitos peligrosos -que, además de dolor, son costosos para la sociedad— es discutible que la quema de pólvora dos veces al año ocupe el primer lugar.

Entiéndase bien: no es que no deba atenderse ese problema e incluso tomarse medidas drásticas para disminuir o erradicar su impacto negativo. Pero se tiene que ser consecuente con lo que se predica y si lo que en verdad se busca es proteger a niños, jóvenes y adultos de riesgos y peligros, en la lista de prioridades deben estar, ante todo, la tenencia y uso de armas de fuego, cuyos estragos se extienden a lo largo del año; en segundo lugar, el uso de vehículos por parte de quienes son una amenaza cotidiana para sus semejantes; y en tercer lugar, la comida chatarra, cuyo consumo está provocando dolencias de todo tipo, así como costos permanentes en el sistema de salud.

Esos problemas son dignos de las campañas mediáticas más amplias, pues, aunque algunos de ellos -como la comida chatarra— son silenciosos, su impacto social y sus costos para la salud son más graves que la quema de pólvora el 24 y el 31 de diciembre.

En fin, así como es importante priorizar los problemas en orden de magnitud, complejidad y relevancia, también se tiene que potenciar a las instancias más idóneas para darles la atención debida.

No faltarán los que digan que la instancia que debe ser privilegiada es el mercado. Se equivocan de medio a medio: la instancia que debe ser potenciada, si se quieren atender debidamente los problemas que afectan a la sociedad, es el Estado. También aquí hay que establecer prioridades, ya que si bien el Estado en su conjunto debe ser fortalecido, la mayor atención debe centrarse en aquellas esferas estatales que atienden ejes fundamentales de la dinámica social: educación, salud, economía y medio ambiente.

En este orden de ideas, consolidar un Estado sólido -fuerte y eficiente— es uno de los principales desafíos para 2012. Los voceros del fundamentalismo del mercado se oponen a ello; más aún, una de sus banderas de lucha consiste en proclamar que el Estado, lejos de contar con más recursos, debe poseer los menores recursos posibles. La contracara de esa tesis es que el Estado, a

diferencia del mercado, usa mal los recursos a su disposición, de lo que se sigue que lo mejor es reducirlos al máximo. Salvo para sus adalides, la tesis de los mercados eficientes y autorregulados es un mito. Un mito que ha salido caro a las sociedades que dejaron la gestión de sus problemas a un mercado regentado por empresarios inescrupulosos.

A estas alturas, es indiscutible que solo el Estado puede asumir la gestión de esos problemas. No, como es obvio, un Estado gigante e ineficiente (no un *Ogro filantrópico*, como lo llamó Octavio Paz), sino un Estado fuerte, eficiente y con capacidades de gestión estratégica.

20 años de los Acuerdos de Paz

Han pasado 20 años desde aquel momento de euforia colectiva, en el que se ponía fin a más de una década de guerra civil. Eran tiempos esperanzadores aquellos; en el horizonte se vislumbraba un futuro sin nubarrones y tormentas. No había malos augurios; al contrario, el país se mostraba fértil para los mejores empeños. Muchas cosas estaban pendientes y de lo que se trataba era de poner manos a la obra. ¿En qué dirección, siguiendo cuál ruta? En la trazada por los Acuerdos de Paz. La clave para arribar a buen puerto era, precisamente, esa: cumplir con los Acuerdos de Paz, tomados en su integralidad.

Y desde los primeros momentos que siguieron al 16 enero de 1992 la ruta de la integralidad de los Acuerdos de Paz no se tomó. Poderosos intereses económicos y políticos -intereses particulares, no de nación— comenzaron a encarrilar al país no solo en una ruta distinta a la trazada por los Acuerdos de Paz, sino de espaldas y en contra de lo que estos, en su integralidad, exigían: crear un nuevo orden social, económico y político, democrático e incluyente, más justo y equitativo con los sectores mayoritarios de El Salvador.

Positivamente, durante dos décadas se hizo todo para que ese nuevo orden no se edificara. Y los resultados de semejante equivocación están a la vista: migración masiva a Estados Unidos, violencia social y criminal desbordada, un modelo económico que ya se ha agotado y una democracia estancada en sus posibilidades de asegurar no sólo la inclusión política, sino la inclusión socio-económica.

A 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz hay quienes opinan que lo mejor es pasar la página y verlos como un bonito recuerdo del pasado. Algo que sería parte del folclor nacional. A ellos se oponen quienes insisten en que este es el momento de desengavetarlos y cumplirlos de una buena vez. Los primeros pecan de reaccionarios; los segundos -aunque despiertan las simpatías de quien esto escribe— no dejan de ser propensos a cierta ingenuidad. Es que no se trata solo dar vigencia a unos documentos que ciertamente son importantes, sino de

caer en la cuenta de lo distinto que es El Salvador de ahora a El Salvador de 1992.

Los Acuerdos de Paz fueron elaborados para un país que no es este que tenemos ahora. En aquel momento queríamos salir de la guerra y desmilitarizar a la sociedad -esto condicionó fuertemente la estructura de los documentos-, mientras que el modelo agrícola de los años setenta, pese a su crisis, no había sido reemplazado por un modelo económico distinto.

La migración de esos años tuvo un componente primariamente político y las remesas, sobre todo en los primeros años de la guerra, no eran un alimento necesario para el modelo económico vigente. Al cierre de los años setenta y casi todos los ochenta, usar la categoría “violencia social” para referirse a la violencia predominante hubiera sido contraproducente. En fin, es a ese país al que responden los Acuerdos de Paz.

Veinte años después, ese país es el mismo, pero también es distinto. Obrar de espaldas a los Acuerdos de Paz hizo que a viejos problemas estructurales se sumaran otros que, de ser coyunturales -como las pandillas o las bandas de secuestradores y de traficantes de drogas, vehículos o armas-, se han vuelto estructurales. O sea, El Salvador es más complejo ahora que cuando recién salía de sus 12 años de guerra civil.

Quizás los Acuerdos de Paz no sean una buena respuesta a los problemas de ahora. No obstante, no se quiere decir que no sirvan para nada. Más bien, deben ser tomados como un punto de partida y deben ser completados. Se necesita un nuevo proyecto de nación, que eso fueron los Acuerdos de Paz. Estos documentos deben ser pieza clave en ese nuevo proyecto; otra pieza: las Bases para el plan de Nación. Y por último: el Plan quinquenal de desarrollo de este gobierno. Por ahí es por dónde hay que buscar la ruta que El Salvador debe seguir en pos de un mejor futuro para sus hijos e hijas.

Santa Tecla, 9 de enero de 2012